



no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!

Año 23 - (3ra. época)

12-05-2020

EDICIÓN ESPECIAL

Profundizar la organización popular

Presentamos este número especial de *no transar*, editado en el contexto de crisis sanitaria por el coronavirus. Lo hacemos para que el aislamiento físico que impone la pandemia no redunde en un aislamiento político: en las difíciles condiciones actuales, *no transar* sigue siendo una herramienta para la organización colectiva. Ofrecemos esta entrega para leer y difundir entre nuestra militancia, simpatizantes y compañeros de lucha, en la vocación de que la salida de esta crisis ponga por delante los intereses de los trabajadores y el pueblo.

La pandemia en el marco de la disputa

Pág. 9

Pandemia y pobreza

Pág.20

Deuda Externa: suspender todos los pagos

Pág.23

A 55 años de la fundación de nuestro partido

Pág.31

Editorial

Cuanto más cuarentena, mayores limitaciones

Con la extensión de la cuarentena al 24 mayo, más allá de las flexibilizaciones que gradualmente se fueron ampliando, se cumplirían 65 días de la decisión sanitaria adoptada por el gobierno para enfrentar al covid19.

Los resultados, visto el número de fallecidos y afectados en otros países, resultan menos catastróficos hasta el momento y le han generado al presidente un reconocimiento social mayor al sostenido originalmente. Dicho eje se transformó en principal, y a su vez un termómetro para la calificación de sus referentes políticos. Quedó al desnudo un inexistente derecho a la salud igualitaria o de bienestar en el capitalismo globalizado, donde las multinacionales y laboratorios aparecen como “motores de la economía y el progreso”, pero que apenas desatada la pandemia cada cual buscó lucrar a su manera, dejando al desamparo la salud popular. La prórroga por cuarta vez de la cuarentena soporta el hostigamiento de grandes grupos empresarios más preocupados por lo que deja de ganar que por la vida de los trabajadores. Por otro lado el gobierno sabe que precipitado el pico de la pandemia, según los daños ocasionados, puede afir-

marse o no el reconocimiento popular. En tal caso el coctel que resultará de la combinación entre el aumento de pérdidas humanas y el deterioro laboral agudizado por la paralización de la economía, puede ser letal para las aspiraciones de la coalición gobernante.

Cuanto más se alarga la medida mayor gravitación tienen los problemas de vida, de tal forma que para muchas familias en situación desfavorable el hambre y la necesidad laboral pesan de la misma forma que la posibilidad del contagio. El problema, hoy agravado, está en las limitaciones del propio proyecto oficial, antes de que se declare la pandemia, carente de toda perspectiva de introducir cambios decisivos para terminar con la decadencia que se arrastra por décadas. Aquel proyecto inicial, diluido en el afán de sacar al macrismo como base del Frente de Todos, acentuó sus debilidades programáticas en lugar de radicalizarlas.

El no pago, la única salida

La negociación por la deuda externa, más allá del rechazo inicial de los bonistas y de la inmediata voluntad explicitada por el gobierno para llegar a un acuerdo antes del 22 de mayo, dejó de ser un desafío en la medida que solo abarca el 21% del total de la deuda pública y en que tampoco se manifiestan intenciones oficiales de aprovechar la crisis mundial abierta. En efecto, los U\$S 68.000 millones en cuestión sobre los cuales habrá quitas y un tiempo de espera, son una parte de los U\$S

323.000 millones que se adeudan al 31/03/2020 por todo concepto. Entre los acreedores figuran el Banco Mundial, FMI, Club de París, BID, CAF, etc., por lo cual si no se impone el No pago o suspensión de los mismos por todo concepto, el drenaje de divisas continuará y la deuda interna contraída con el pueblo nuevamente violada y agravada mucho más.

Régimen carcelario, parte de un sistema corrupto y decadente

Tomó inusitado revuelo político la situación de los presos en las cárceles del país. El deterioro del sistema carcelario, lejos de una función correctora, actúa como estímulo al reclamo de los reclusos, en cuanto oportunidad se les presente: en este caso, por la elevada posibilidad de que el virus una vez entrado a los penales sea imposible de controlar, tal como sucedió en otros lugares. En Francia, Estados Unidos, Turquía, Brasil, Méjico, España, etc., cumplieron con las recomendaciones de las Naciones Unidas y dejaron en libertad a miles de presidiarios. En provincia de Bs As fueron casi 2200 beneficiarios de prisiones domiciliarias o libertades condicionales. La aparición en la lista -real e inventada- de algunos feministas y violadores, fue la excusa de sectores de la ortodoxia macrista para machacar con el eje de la “seguridad”, lo cual reflató las internas en el gobierno y el inmediato pasaje a la defensiva. Previamente a los hechos, había detonado la decisión del juez Obligado que ordenó la

salida de Boudou que tenía condena firme, y luego ese mismo juez contrapesó con la libertad del genocida y torturador de la ESMA Carlos Capdevilla. Quedó en evidencia la explosión del sistema carcelario como parte también de una sociedad que se descompone. El aumento de 46.600 presos en 2003 a poco más de 98.000 en 2019. El 60% permanece con prisión preventiva y está por debajo de los 34 años de edad. En este marco el debate entre punitivistas y garantistas es solo papel mojado. Los males de fondo que el capitalismo monopólico arrastra, la falta de perspectivas en la juventud y la profunda inequidad social junto al orden jurídico existente, solo se pueden resolver con políticas de fondo.

Extorsión de las petroleras

El retorno del “barril criollo” es una concesión a las petroleras que, afectadas por la caída del crudo a nivel internacional, amenazan con la paralización total de la producción, sobre todo en Vaca Muerta. No fue suficiente el cierre de pozos ni la reducción de los salarios para los casi 20.000 operarios que se mueven en la cuenca petrolera. En efecto, la precarización validada con la firma del dipu-sindicalista Guillermo Pereyra, redujo el promedio salarial de \$100.000 a \$35.000 mientras no desarrollen actividades. Pero el reconocimiento a U\$S 45 el barril (Brent) mientras afuera se paga 30/35 dólares es un sobreprecio inadmisibles, tratándose de los grandes grupos cuyas ganancias en tiem-

pos normales crecen exponencialmente. La extorsión para que el estado los compense se fundamenta en las mayores pérdidas que significaría el desmantelamiento o paralización de la industria hidrocarburífera. Con esa lógica de la dependencia justamente, tratándose de un recurso estratégico, el peronismo no tiene chance alguna de recuperar soberanía ni establecer diferencias esenciales con el gobierno anterior. Al final de cuentas YPF es una sociedad anónima con mayoría estatal, pero en cuya composición accionaria también operan los fondos de inversión. Ni siquiera la posibilidad de bajar los precios del combustible al consumidor, como sucede en el resto de los países, entró en consideración. Con lo cual al sobreprecio de extracción del barril se le debe adjuntar el precio de consumidor, sobre todo en aquellas empresas que poseen el circuito productivo integrado, como PAE de los Bulgheroni y la misma YPF.

Arreglo CGT-UIA

Colocar el problema de la salud en primer lugar, de por sí no está mal. La falta de resto, en un país que llega desvencijado, puso en cuestión rápidamente las dificultades económicas y la condición social de millones de argentinos. Sectores del staff empresario, ante la paralización parcial de las actividades presionan para descargar los costos en los trabajadores o en su defecto obtener mayores subsidios. Reciben, además del 50% sobre el neto de cada salario, la exención de hasta el 95% de

las contribuciones patronales, préstamos y moratorias impositivas cuyos intereses serán licuados prontamente por la inflación. La contracara son los miles de trabajadores que recibieron en estos días importes no remunerativos por debajo del sueldo neto que regularmente les corresponde. Una quita del 25% mínimo para quienes no asisten a sus puestos laborales producto de la cuarentena, a la cual el acuerdo CGT-UJA-Gobierno le terminó poniendo el moño.

La quita en algunas actividades (petroleras y servicios) superan al 30/40% del neto, con lo cual la angustia y la bronca, que ya de por sí soportan los trabajadores y su núcleo familiar acosados por el virus, se profundizan. De la suspensión al despido hay un corto trecho, y más cuando hay tantos casos de violación al decreto presidencial que prohibió ambas medidas. En sectores públicos también se producen pagos en cuotas, descuentos de adicionales o despidos en municipios, reducción de horas y premoniciones sobre bonos o cuasi monedas, que no se asumen pero ya se planifican en las provincias. No se trata solo de recortes a trabajadores de empresas privadas, sino de una decisión política emprolijada con el discurso de distribuir los costos de la crisis, pero que en los hechos se descarga sobre la mayor parte de los asalariados. No hay un solo banco o cerealera que hayan cerrado por quiebra en estos tiempos. Como tampoco alguno de los “gordos” o jerarcas sindicales que se hayan desprendido de mansiones o privilegios. Si hasta el propio Rocca de Techint, luego de haber

sido denostado por el presidente, arregló con el gremio y dejó en la calle a los 1.500 trabajadores en cuestión. A la par, hay millones de desocupados, miles de suspendidos, cientos de pymes y comercios cerrados y otros tantos pequeños productores sin rumbo cierto en todo el país. El contubernio UIA-CGT sienta precedentes para reducir los salarios o congelar paritarias post cuarentena, fue validado sin consulta de base alguna y sin contar con el visto bueno de gran parte del sindicalismo. Hacia allí avanzan quienes hablan de un “nuevo orden” o “nueva normalidad” una vez recuperada la actividad. No imaginan otra posibilidad que no sea una economía ajustada con trabajos flexibilizados y salarios achatados.

Los recursos están

Detrás de la falsa disyuntiva entre salud y economía se oculta la precariedad para poder cumplir ambas cosas con solvencia. Los recursos están, pero requieren definiciones que Fernández no está dispuesto a tomar. Cuándo tendrán mejor oportunidad para intervenir a los bancos que malversan el uso de los depósitos con sentido especulativo, o para forzar al cumplimiento de los precios en las grandes cadenas, o para terminar con el regateo y disponer el no pago de la deuda externa ilegal e ilegítima, o recuperar el manejo centralizado de los recursos energéticos. Tareas todas que de concretarse, los recursos para superar cualquier estarían disponibles, sin necesidad de tanto sufrimiento ni

angustias como las actuales.

Entonces deberán resolver por otro camino cómo reactivar la economía sin que se desmadre la asistencia sanitaria. Con la cuarentena quedó afectada el 65% de la actividad, salvo los servicios esenciales iniciales a los que se le fueron agregando las aperturas actuales. El billón de pesos asignados para sostener el Programa de Asistencia (ATP), pymes, cuentapropistas, changas, IFE, etc. son insuficientes frente a los despidos y empobrecimiento cada vez más acentuados. Ya se bordea las mismas cifras de pobreza que en 2001, pero las perspectivas reactivadoras todavía no aparecen. Se espera una caída de 7 a 8 % en el PBI, y la emisión como política monetaria puede aliviar transitoriamente pero luego termina en escalada inflacionaria.

De allí que los reclamos de los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra el covid19, en hospitales, salas y barrios, se complementa también con las de los obreros en cuyas instalaciones las patronales no cumplen con los protocolos sanitarios o de los establecimientos que cierran, despiden o no pagan los haberes. Así fue con Cicop y médicos residentes, con los despidos en Penta y los municipales de Jesús María, y hoy suman los obreros de Cerro Negro en Olavarría. De igual forma forman esa primera línea las organizaciones territoriales, organizando ollas con sus propios recursos y reclamando para que se cumpla con las entregas de alimentos a comedores y merenderos junto a los kits de higiene y seguridad. Destacada participación de las mujeres que, así como son

protagonistas directas no cejan en su denuncia y lucha contra los femicidios de cuarentena, al igual que nuestros jóvenes brindando solidaridad comunitaria y entregados a la causa de luchar por una sociedad mejor. La causa de la revolución.

Andrés Zamponi

Córdoba

La cuarentena como oportunidad para avanzar contra los trabajadores

La parálisis del conflicto social que introdujo la cuarentena ha empezado a resquebrajarse. A las penurias que ya se arrastraban desde antes de la llegada de la pandemia se han ido acumulando dificultades propias de este contexto. Si en las primeras semanas había un consenso tácito en la necesidad del aislamiento sanitario, ahora éste convive con la disputa por las condiciones materiales en que se lleva adelante. No en los términos del discurso oficial, respecto de un daño en “algún puntito del PBI”, sino en los crudos términos de la vida cotidiana: llegar a fin de mes con un sueldo miserable, garantizar un plato de comida sin tener ingresos, conservar el empleo resignando derechos, ir a trabajar a riesgo de contagio, defender el trabajo, el salario y la salud a pesar de la represión. Esto es la cuarentena en la vida real.

En la víspera de una jornada piquetera que retumbó en todo el país, los trabajadores municipales de Jesús María protagonizaron una digna jornada de lucha en defensa de su salario, reclamando por el pago de una serie de sumas acordadas con el

gobierno municipal de Luis Picat, que fueron desconocidas al liquidar los sueldos de abril (y que en algunos caos superaban el 30% del salario). Esto dejó a muchos trabajadores que cumplen tareas esenciales cobrando un sueldo de alrededor de \$15.000: la indigencia fomentada desde el propio Estado. La respuesta fue un paro con concentración en las puertas del obrador municipal que se mantuvo durante todo el día. Al caer la noche, como acostumbran los cobardes, la justicia da la orden y la infantería de la Policía de Córdoba -aportada por el gobernador Schiaretti- reprime a los compañeros, llevándose a más de cuarenta detenidos que pasan toda la noche en el patio de la comisaría, bajo el eufemismo de “haber violado la cuarentena”. La firma de un acta posterior entre el gremio SITRAM y el municipio es un retroceso del ejecutivo sobre su posición, dada la legitimidad y la unidad del reclamo de los trabajadores.

En la misma tónica, Martín Laryora, intendente de Córdoba capital, dispuso un recorte de salarios para todos los empleados municipales de alrededor del 15%, acompañado de una reducción de una hora en la jornada de trabajo que busca disimular el ajuste. Esta ordenanza tuvo el respaldo de los concejales oficialistas en la sesión virtual del viernes 8, mientras el edificio del Concejo Deliberante se blindaba de policías para recibir una movilización de un centenar de trabajadores del SUOEM que llegaron hasta la puerta. No se los atendió ni se les aceptó un pedido de reunión. Solo intimida-

ción policial como resguardo de la decisión política. El mensaje del pejotismo en el municipio es claro: el costo de financiar la cuarentena lo pagan los laburantes. La respuesta de los trabajadores está en proceso, aunque se derrumban las expectativas que en algunos sectores había generado el cambio de gobierno. Si bien todos los recursos son válidos para tumbar esta medida, los intentos de la conducción del gremio por judicializar el conflicto no tienen futuro: la Fiscalía General está concentrada en la identificación de quienes se movilizaron el viernes para abrirles una causa por “violación de la cuarentena”. Aún con las limitaciones del momento, los municipales tienen que procurar la recuperación de sus métodos históricos: asamblea y plan de lucha con paro y movilización. De lo contrario, las “medidas de emergencia” que está tomando el municipio tenderán a volverse permanentes.

Los atropellos contra los trabajadores no terminan ahí. En el ámbito privado la situación también es preocupante. El lunes 4 los obreros de la planta Bagley (grupo Arcor) tenían prevista una asamblea para tratar el incumplimiento de la empresa en los adicionales por presentismo y trabajo nocturno. Mientras la asamblea se desarrollaba, ingresó a la planta personal policial directamente a disolverla e intentar llevarse detenido al dirigente gremial que estaba presente. La excusa para ello fue nuevamente la violación del decreto de aislamiento social. La proximidad social es “sana” cuando se agacha la cabeza para trabajar, y se convierte en “peligrosa” cuando se levanta la frente para luchar

por los derechos laborales. Esta irrupción de la policía en la fábrica y la bronca lógica de los trabajadores que se repite en numerosos establecimientos, fueron el caldo de cultivo para que el gremio de la alimentación (FTIA) convoque a un paro el lunes 11 en todas las plantas del Grupo Arcor en el país, reclamando el cumplimiento de los puntos citados, un adicional por trabajar en cuarentena y de medidas de seguridad sanitaria en todos los establecimientos del grupo. Por el momento la única intervención del Ministerio de Trabajo fue para declarar la conciliación obligatoria por 15 días.

Los conflictos se multiplican. El paro del viernes 8 de los trabajadores de UTA por el incumplimiento del pago a término de sus salarios se ha extendido a esta semana sin solución, la prolongada lucha de los trabajadores de Aoita (transporte interurbano) por la falta de pago de sus salarios de marzo y abril sigue firme, la protesta en pleno centro de la ciudad con detención de uno de los trabajadores de las apps de delivery por salario y condiciones de trabajo, la ruina de los comerciantes que se anticiparon en la apertura de sus locales a la habilitación del gobierno, los múltiples reclamos de los trabajadores de la salud por la falta de insumos para trabajar y las pésimas condiciones laborales, el ajuste en la educación con cientos de cargos vacantes y la precarización del trabajo de los docentes, y el constante hostigamiento de las fuerzas represivas a las protestas y a los barrios de trabajadores más humildes, son sólo ejemplos de una situación que se vuelve cada semana un poco más tensa.

Desde el comienzo hemos sido partidarios de cumplir con las medidas de prevención que, a falta de una vacuna, garantizan cierto cuidado a la salud popular. Sin embargo, también advertimos que, si esto no iba acompañado de medidas de fondo en la administración económica para garantizar condiciones dignas de vida a las amplias mayorías populares, la cuarentena sería una potenciación de las penurias económicas y sociales del pueblo trabajador. Y con ello, un salto en los conflictos agravados por la administración de la cuarentena.

La cuarentena tenía el sentido de achatar la curva de contagios para darle tiempo al sistema de salud a que se prepare para poder atender la emergencia. Pero los principales focos de contagio son precisamente en los centros de salud: caso emblemático el del Hospital Italiano donde, luego de tres semanas de multiplicar los contagios, el COE resuelve derivar a todos los pacientes al hospital público. Mientras se deja a los hospitales públicos sin recursos para atender debidamente a la población. Esto quiere decir que la administración de tal cuarentena choca de frente con los intereses populares. El tiempo no se está aprovechando desde el gobierno provincial y los municipios para preservar la salud del pueblo sino para sostener la aplicación de medidas antipopulares: apoyar el pago de la deuda externa, seguir perdonando a los banqueros y monopolios que hacen lo que quieren, descargar el ajuste salarial y presupuestario sobre los trabajadores y el pueblo, alistar a las fuerzas represivas para poner en caja al que no se resigna

a esto. Sostenemos la necesidad de asumir activamente el cuidado de la salud popular, y al mismo tiempo llamamos a fortalecer la organización en los barrios y en los ámbitos de trabajo y estudio, preparándonos para que sea la intervención obrera y popular la que imponga su sello a la salida de una crisis que lleva años de incubación y no hace más que agravarse en este contexto.

Leo Funes

Con hambre no hay cuarentena posible

El Frente de Lucha Piquetero realizó una jornada nacional exigiendo al gobierno entrega de alimentos y elementos de higiene, además del cumplimiento con el pago del IFE a los más de once millones que lo solicitaron.



La medida se hizo efectiva luego de tener varias reuniones presenciales y por video conferencia con el ministro de Desarrollo Social y otros funcionarios de primera línea de esa cartera, los cuales solo recomendaban esperar a que los proveedores de mercadería presenten ofertas y se abran las licitaciones, cosa que estaba difícil porque los fabricantes de alimentos se negaban a licitar al precio de lista.

La jornada de lucha se cumplió en gran parte del país. Los compañeros se movilizaron con sus barbijos, dejando la distancia suficiente, muchos exhibieron carteles y pancartas con los reclamos desde las ollas populares, comedores y merenderos.

En Resistencia (Chaco) la policía del gobernador Capitanich detuvo a ocho manifestantes, cinco de CUBa-MTR y tres del Polo Obrero, que fueron trasladados a la comisaría 2° de Resistencia y quedaron en libertad horas más tarde debido a la importante solidaridad de organizaciones piqueteras, sociales, sindicales y de partidos políticos, entre otras.

La actividad concluyó luego de varias horas de protesta, cuando fueron recibidos en diferentes provincias dirigentes de las organizaciones presentes. En el caso de Nación el funcionario a cargo se comprometió a hacer efectiva la entrega de alimentos secos y otros elementos en siete días, además de que se efectuaría en las próximas horas el pago del IFE.

En esta cuarentena se pierde la “changa” que siempre arrima un peso a los hogares humildes. La remarcación de los alimentos es imparable. La situación en las barriadas populares es cada día más dura. Es difícil cumplir con la cuarentena sin un plato de comida, o “quedarse en casa” si hay que ir a buscar agua con baldes a la canilla más cercana que está a 200 metros. El pretendido cumplimiento a rajatabla se desoye cuando se vive en condiciones de hacinamiento.

Si no hay un verdadero cumplimiento con los puntos exigidos, volveremos a las calles. No permitiremos que el control sea sobre la población y no sobre las empresas fabricantes de alimentos que especulan en este estado de pandemia, suspenden y despiden trabajadores. Es necesario que el

Córdoba

La cuarentena como oportunidad para avanzar contra los trabajadores

La parálisis del conflicto social que introdujo la cuarentena ha empezado a resquebrajarse. A las penurias que ya se arrastraban desde antes de la llegada de la pandemia se han ido acumulando dificultades propias de este contexto. Si en las primeras semanas había un consenso tácito en la necesidad del aislamiento sanitario, ahora éste convive con la disputa por las condiciones materiales en que se lleva adelante. No en los términos del discurso oficial, respecto de un daño en “algún puntito del PBI”, sino en los crudos términos de la vida cotidiana: llegar a fin de mes con un sueldo miserable, garantizar un plato de comida sin tener ingresos, conservar el empleo resignando derechos, ir a trabajar a riesgo de contagio, defender el trabajo, el salario y la salud a pesar de la represión. Esto es la cuarentena en la vida real.

En la víspera de una jornada piquetera que retumbó en todo el país, los trabajadores municipales de Jesús María protagonizaron una digna jornada de lucha en defensa de su salario, reclamando por el pago de una serie de sumas acordadas con el gobierno municipal de Luis Picat, que fueron desco-

nocidas al liquidar los sueldos de abril (y que en algunos caos superaban el 30% del salario). Esto dejó a muchos trabajadores que cumplen tareas esenciales cobrando un sueldo de alrededor de \$15.000: la indigencia fomentada desde el propio Estado. La respuesta fue un paro con concentración en las puertas del obrador municipal que se mantuvo durante todo el día. Al caer la noche, como acostumbran los cobardes, la justicia da la orden y la infantería de la Policía de Córdoba -aportada por el gobernador Schiaretti- reprime a los compañeros, llevándose a más de cuarenta detenidos que pasan toda la noche en el patio de la comisaría, bajo el eufemismo de “haber violado la cuarentena”. La firma de un acta posterior entre el gremio SITRAM y el municipio es un retroceso del ejecutivo sobre su posición, dada la legitimidad y la unidad del reclamo de los trabajadores.

En la misma tónica, Martín Laryora, intendente de Córdoba capital, dispuso un recorte de salarios para todos los empleados municipales de alrededor del 15%, acompañado de una reducción de una hora en la jornada de trabajo que busca disimular el ajuste. Esta ordenanza tuvo el respaldo de los concejales oficialistas en la sesión virtual del viernes 8, mientras el edificio del Concejo Deliberante se blindaba de policías para recibir una movilización de un centenar de trabajadores del SUOEM que llegaron hasta la puerta. No se los atendió ni se les aceptó un pedido de reunión. Solo intimidación policial como resguardo de la decisión política. El mensaje del pejotismo en el municipio es cla-

ro: el costo de financiar la cuarentena lo pagan los laburantes. La respuesta de los trabajadores está en proceso, aunque se derrumban las expectativas que en algunos sectores había generado el cambio de gobierno. Si bien todos los recursos son válidos para tumbar esta medida, los intentos de la conducción del gremio por judicializar el conflicto no tienen futuro: la Fiscalía General está concentrada en la identificación de quienes se movilizaron el viernes para abrirles una causa por “violación de la cuarentena”. Aún con las limitaciones del momento, los municipales tienen que procurar la recuperación de sus métodos históricos: asamblea y plan de lucha con paro y movilización. De lo contrario, las “medidas de emergencia” que está tomando el municipio tenderán a volverse permanentes.

Los atropellos contra los trabajadores no terminan ahí. En el ámbito privado la situación también es preocupante. El lunes 4 los obreros de la planta Bagley (grupo Arcor) tenían prevista una asamblea para tratar el incumplimiento de la empresa en los adicionales por presentismo y trabajo nocturno. Mientras la asamblea se desarrollaba, ingresó a la planta personal policial directamente a disolverla e intentar llevarse detenido al dirigente gremial que estaba presente. La excusa para ello fue nuevamente la violación del decreto de aislamiento social. La proximidad social es “sana” cuando se agacha la cabeza para trabajar, y se convierte en “peligrosa” cuando se levanta la frente para luchar por los derechos laborales. Esta irrupción de la policía en la fábrica y la bronca lógica de los trabajadores que

se repite en numerosos establecimientos, fueron el caldo de cultivo para que el gremio de la alimentación (FTIA) convoque a un paro el lunes 11 en todas las plantas del Grupo Arcor en el país, reclamando el cumplimiento de los puntos citados, un adicional por trabajar en cuarentena y de medidas de seguridad sanitaria en todos los establecimientos del grupo.

Los conflictos se multiplican. El paro del viernes 8 de los trabajadores de UTA por el incumplimiento del pago a término de sus salarios, la protesta en pleno centro de la ciudad con detención de uno de los trabajadores de las apps de delivery por salario y condiciones de trabajo, los múltiples reclamos de los trabajadores de la salud por la falta de insumos para trabajar y las pésimas condiciones laborales, el ajuste en la educación con cientos de cargos vacantes y la precarización del trabajo de los docentes, y el constante hostigamiento de las fuerzas represivas a los barrios de trabajadores más humildes, son sólo ejemplos de una situación que se vuelve cada semana un poco más tensa.

Desde el comienzo hemos sido partidarios de cumplir con las medidas de prevención que, a falta de una vacuna, garantizan cierto cuidado a la salud popular. Sin embargo, también advertimos que, si esto no iba acompañado de medidas de fondo en la administración económica para garantizar condiciones dignas de vida a las amplias mayorías populares, la cuarentena sería una potenciación de las penurias económicas y sociales del pueblo trabajador. Y con ello, un salto en los conflictos agravados

por la administración de la cuarentena.

Si la cuarentena tenía el sentido de achatar la curva de contagios para darle tiempo al sistema de salud a que se prepare para poder atender la emergencia, y los principales focos de contagio son precisamente en los centros de salud (caso emblemático del Hospital Italiano), mientras se deja a los hospitales públicos sin recursos para atender debidamente a la población, esto quiere decir que la administración de tal cuarentena choca de frente con los intereses populares. El tiempo no se está aprovechando desde el gobierno provincial y los municipios para preservar la salud del pueblo sino para sostener la aplicación de medidas antipopulares: apoyar el pago de la deuda externa, seguir perdonando a los banqueros y monopolios que hacen lo que quieren, descargar el ajuste salarial y presupuestario sobre los trabajadores y el pueblo, alistar a las fuerzas represivas para poner en caja al que no se resigna a esto. Sostenemos la necesidad de asumir activamente el cuidado de la salud popular, y al mismo tiempo llamamos a fortalecer la organización en los barrios y en los ámbitos de trabajo y estudio, preparándonos para que sea la intervención obrera y popular la que imponga su sello a la salida de una crisis que lleva años de incubación y no hace más que agravarse en este contexto.

Leo Funes

Mientras luchamos contra la violencia machista en tiempos de cuarentena preparemos un #3J de lucha y en las calles

Ni una Menos, Vivas y Libres nos queremos

La cuarentena está profundizando las desigualdades y la violencia hacia las mujeres, lesbianas, trans, travesti, bisexuales y no binaries. Se agravó la cruda realidad que venimos denunciando a través de nuestro grito de Ni una Menos, porque la situación de encierro expuso mucho más a las mujeres víctimas de violencia machista producto de la convivencia prolongada con su agresor. Y si bien el gobierno reconoce esta situación, no ha destinado los recursos presupuestarios necesarios para enfrentarla.

Desde el PRML somos parte de los ruidazos contra los femicidios y además con medidas de cuidado salimos a defender nuestro derecho por una cuarentena sin violencia. A fines de abril concentramos en la puerta del Polo de la Mujer como integrantes de la Asamblea Ni una Menos en Córdoba, reclamando justicia por el femicidio de Cecilia Basaldua. Concentración que se repetirá el próximo jueves 14 de mayo preparándonos para las jornadas del próximo #3J. En este camino es importante promover los debates dentro del movimiento de mujeres y feminista para programar próximas concentraciones, saliendo también por el aborto legal el próxi-

mo 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Además promovemos, sobre las experiencias organizativas del movimiento feminista, allí donde sea posible, levantar comités de crisis de mujeres, LTTBNb, que nos permitan organizarnos y accionar contra el embate de la crisis que se descarga duramente sobre nosotras.

En Argentina hay en promedio un femicidio cada 24hs. En lo que va del aislamiento se registraron 36. Muchas organizaciones advertimos que la situación de violencia (física, psicológica, económica y sexual entre otras) iba a empeorar, teniendo en cuenta que -según los datos oficiales- el 75% de los femicidios se producen en la casa de la víctima en manos de parejas o ex parejas y que los asesinatos son la consecuencia más atroz de la violencia machista desplegada dentro de los hogares. En este sentido las denuncias por casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se dispararon en este período, siendo posible que, según las últimas estadísticas, una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños, este aislada con su abusador. Si a esto le sumamos la ausencia que tenemos de arrastre en políticas que tengan un impacto real en el combate contra violencia hacia las mujeres, trans, travestis, advertimos por qué la cuarentena preventiva, se transformó para muchas en una situación que potenció los riesgos a los que vienen estando expuestas y aumentó su indefensión, dejando a la vista los límites de la medida en este contexto.

La respuesta del gobierno fue disponer una fuerte

propaganda sobre las líneas de atención telefónicas como la 144 (basadas en la precarización laboral), que registran un enorme colapso ante el incremento de los llamados y pedidos de ayuda que no encuentran respuestas concretas. La realidad es que el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se creó sin tener asignado presupuesto suficiente y acorde. Por eso exigimos que con urgencia se destine un aumento real de presupuesto a las áreas de género, que debe contar con personal con condiciones dignas de trabajo. Hoy es de primer orden garantizar asistencia económica para quienes estén atravesando situaciones de violencia, así como el acceso a refugios y resguardos habitacionales para las mujeres, LTTBNb que lo requieran durante la cuarentena. Se tienen que brindar soluciones efectivas con acciones de prevención y asistencia concretas y sostenidas en el tiempo, como venimos reclamando desde el movimiento de mujeres y feminista. La cuarentena sacó a luz la importancia de nuestro reclamo por trabajo genuino y acceso a la vivienda digna como medidas básicas y necesarias para poder buscar alternativas con autonomía que permitan la independencia del agresor, por eso todos estos reclamos tienen que tomar fuerza el #3J.

Crisis económica, interminable jornada laboral y la olla en las barriadas

Las violencias que padecemos están vinculadas con nuestras condiciones materiales de vida ge-

nerando que las mujeres del pueblo seamos las que más sufrimos las consecuencias económicas negativas de la crisis. Descargada una vez más sobre el conjunto del pueblo trabajador, a nosotras en relación con los varones nos golpea de forma diferencial, viéndonos más perjudicadas porque somos las más desocupadas, las más precarizadas en los trabajos y las más pobres entre los pobres. Sin escuela estamos sobrecargadas por las tareas domésticas y de cuidado que históricamente recayeron sobre nuestras espaldas. Si tenemos empleos formales lidiamos con la combinación de la flexibilización laboral que se impuso durante la cuarentena con el teletrabajo y las exigencias de los cuidados full time. Caso testigo es el de la docencia, donde la mayoría somos mujeres (ejemplo además de la sobre representación en actividades laborales ligadas a estereotipos de cuidado con bajos salarios). Así, la doble jornada laboral es eterna durante este período, incrementándose los niveles de desigualdad afectando nuestra salud física y mental.

Esta sobrecarga también la sufrimos en las barriadas, donde además el parate de la cuarentena y la informalidad nos dejó a muchas sin trabajos, y sin acceso al mango en el bolsillo que conseguimos con las changas, situación agravada para el colectivo trans travesti. Sólo el 31% de las mujeres de los barrios populares tenemos acceso a un trabajo con ingresos, muchos paralizados como es el caso de las empleadas de casa particulares; y la desocupación que azota a la juventud es más alta

entre nosotras: una de cada 5 jóvenes no tenemos trabajo. Así las cosas, la cuarentena volvió a encontrarnos en la primera línea poniendo la olla, transformando el mandato de resolver el hambre, en solidaridad popular como impulsó la CUBa MTR y la Juventud Revolucionaria Che, a la par de salir y reclamarle al gobierno todo lo necesario para pasar la cuarentena con un plato de comida en la mesa.

Respecto a los trabajos declarados esenciales es importante el ejemplo del sector salud, que teniendo en cuenta la enorme precarización laboral y el desfinanciamiento que expuso la pandemia, tomó en sus manos una frase histórica de nuestras luchas visibilizando la importancia de “cuidar a quienes cuidan” y la responsabilidad estatal al respecto.

#3J Presupuesto para nuestros derechos. No al pago de la deuda

Este es el estado crítico con el que vamos a llegar a un nuevo #3J en medio de la pandemia. La tensión por la disputa presupuestaria reedita el debate del #8M alrededor de la deuda externa. El feminismo burgués, resignado a la dependencia eterna, ya lanzó su proclama bancando el pago de la deuda externa. Las feministas partidarias de la liberación nacional y social sostenemos el no pago de la deuda a los buitres y el FMI. La plata tiene que ir a satisfacer las demandas del pueblo trabajador.

Por último destacamos la importancia de retomar

la expresión callejera para conquistar nuestros reclamos en unidad con los sectores de laburantes y del movimiento piquetero que empezaron a salir para enfrentar el hambre, los despidos, suspensiones y el congelamiento salarial que pasan con la complicidad de las centrales sindicales. Desde el PRML apostamos salir a las calles este #3J en el camino de construir una salida popular a la crisis profundizada por la pandemia.

Construyamos un movimiento de mujeres y feminista rebelde y combativo.

Julia Quinteros

La crisis sanitaria es una oportunidad. No la dejemos pasar

*Opinión por Eduardo Maturano**

Uno de los desafíos más importantes para el conocimiento y desarrollo de las ciencias frente a la actual pandemia es completar lo hecho por el Covid-19, es decir, terminar de derribar los supuestos y paradigmas subyacentes a la enfermedad y pugnar por una transformación radical del sistema sanitario teniendo al proceso histórico como guía para tal fin.

En dicho sentido, un caso cercano y reciente de epidemia en nuestra historia local, con un elevado reporte de afectados, lo encontramos en los brotes de fiebre amarilla ocurridos en la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX, en particular el de

1871 cuando fallecieron poco más de 13 mil personas sobre una población cercana a los 180 mil habitantes, es decir, alrededor del 8% de los porteños. En dichas circunstancias la gente huía aterrorizada y se resguardaba tomando distancia de los principales focos ubicados en San Telmo y Monserrat, donde los pobladores vivían hacinados en conventillos. Como lógica consecuencia las calles de Buenos Aires de entonces lucían desiertas y los negocios cerrados. También, al igual que ahora, muchos médicos se contagiaban y morían tratando de salvar a los enfermos, como los hermanos Argerich, Francisco Muñiz, Guillermo Zapiola, etc. Pero lo interesante del caso es que estos médicos nunca dieron en la tecla del porqué de la enfermedad, la cual, por entonces, era atribuida a los tufos pestilentes provenientes del bajo, los denominados “miasmas”. Era la idea imperante en la formación médica de aquel entonces. Imbuidos de la teoría miasmática los médicos improvisaban toda clase de tratamientos, especialmente los catárticos purificantes de la contaminación miasmática, como purgantes, enemas, vomitivos, aceite de ricino, etc., al tiempo que se cuestionaban las curas alternativas, como las aplicaciones tópicas de mostaza, vinagre aromático, alcanfor o quina que, seguramente, actuaron como repelentes contribuyendo a evitar las picaduras de mosquitos, los verdaderos vectores del virus transmisor de la fiebre.

Como es sabido, unos años más tarde, el papel de los mosquitos en la transmisión de la fiebre amarilla fue establecido por el médico cubano Carlos

Finlay, quien aplicó la novedosa teoría metaxénica de transmisión de enfermedades por agentes biológicos, la cual permitió entender este tipo de epidemias y superar, a la vez, el enfoque medieval imperante hasta entonces en el campo de la salud. También, y de forma similar a lo que vemos ahora, durante aquella epidemia no faltaron los desacuerdos sobre cantidad de enfermos y de muertos y los “sabelotodo” que criticaban las medidas de resguardo, empezando por el propio presidente, Domingo Sarmiento (el Bolsonaro de entonces), quien entre otras decisiones lamentables, como la de huir de Buenos Aires para prevenir su propio contagio, no dudó en impedir el cierre del puerto ni tampoco en vetar la extensión de la cuarentena a los buques con enfermos procedentes de Río de Janeiro en un intento desesperado de evitar la caída del comercio y la actividad económica.

La epidemia parida por un virus y un mosquito provenientes de zonas tropicales pero enraizada en las condiciones de existencia, en particular en la explotación de los obreros industriales y trabajadores portuarios obligados a vivir amontonados en conventillos, mal alimentados, sin servicios sanitarios, etc., vino a precipitar la crisis social, económica y sanitaria de entonces resultante del creciente endeudamiento con Inglaterra, los efectos de la guerra contra el Paraguay y la Campaña del Desierto (cuyos presupuestos militares excedieron con creces los destinados a salud), la inversión especulativa en tierras improductivas, la acumulación de mercaderías importadas y el pago de reembol-

sos con el consiguiente recorte en el gasto público y salarios. Es decir, la epidemia puso de relieve la descomposición del conjunto de las relaciones sociales dentro de las cuales la crisis de la salud fue un síntoma más, mientras que el pequeño virus un simple catalizador del desastre.

Hoy, el pensamiento imperante en la formación y la práctica médica es el de la “medicina basada en la evidencia”, resultante necesaria de la irrupción de la Fundación Rockefeller en el terreno de la salud y la agricultura a comienzos del siglo XX, casualmente por el impacto negativo de la fiebre amarilla en la explotación petrolera en el norte de Sudamérica (Colombia y Venezuela), y de su resultante contemporánea, la Fundación Bill y Melinda Gates, fenómeno reseñado por Michael Stevenson (véase: *Agency Through Adaptation: Explaining The Rockefeller and Gates Foundation’s Influence in the Governance of Global Health and Agricultural Developmen*).

Los ejes de ambas fundaciones han sido:

- las campañas contra las enfermedades infecto-contagiosas;
- las reformas de las facultades de medicina favoreciendo la expansión de la medicina flexneriana, en especial la de un biologicismo capaz de modelar una concepción “veterinaria” de la salud humana;
- la asociación entre el Estado y el gran capital monopólico -especialmente de la industria farmacéutica;

- la medicalización de la sociedad con la naturalización del consumo de fármacos y vacunas;
- y la aceptación acrítica del capitalismo como sinónimo de progreso científico, propiciando la formación de salubristas con un perfil acorde al pensamiento médico norteamericano.

De esta forma la medicina basada en la evidencia, resultante de este proceso, no trata más que de aceptar como cierta la “evidencia científica” obtenida de ensayos biológicos propiciados y/o financiados por la gran industria farmacéutica, motivada por ganancias astronómicas.

Por eso, lo que hoy está en cuestionamiento fáctico es esa medicina del gran capital monopólico, simplemente porque el centro neurálgico de este modelo, Estados Unidos, es el lugar más castigado por el Covid-19 según lo acreditan no sólo las cifras record de enfermos y muertos, sino, además, el fiasco de los centros de control de enfermedades (CDCs), la agencia de drogas y alimentos (FDA) y un sistema de salud fuertemente mercantilizado, los cuales, en su conjunto, nada pudieron hacer para evitar semejante catástrofe sanitaria, en particular la de los más pauperizados, la de los más relegados como la población negra y latina, en su gran mayoría sin acceso a la asistencia médica. Como contrapartida el Estado norteamericano liderado por Trump sólo se preocupó en poner por delante el interés de las grandes compañías y los bancos, para quienes no faltaron subsidios millonarios y rescate de acciones en caída libre.

Entonces, insisto, es necesario terminar de derribar los supuestos y paradigmas subyacentes a la enfermedad, poner por delante del causalismo biologicista la determinación social de los procesos subyacentes a las enfermedades, en particular las epidemias, las enfermedades ligadas al extractivismo y la degradación del ambiente, los problemas emergentes en la niñez como los trastornos del desarrollo y su vinculación con la alimentación chatarra, los procesos inflamatorios provocados por la tormenta de vacunas y el llamativo acriticismo médico sobre el empleo de las mismas, terminar con el anacrónico presupuesto de la neutralidad de las ciencias, de su pretendida asepsia política e ideológica y, en fin, superar el sentido ahistórico de la formación y de la práctica médicas, pugnando por una transformación radical de la sociedad y el sistema sanitario.

** Eduardo Maturano es Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Infectología y Especialista en Epidemiología. Se desempeña como Médico de una Unidad de Terapia Intensiva referente en Covid-19 en la Provincia de Córdoba.*

***¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS
PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!***